



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°1631/2019

AUTOS: BLD SA c/ MINISTERIO DE PRODUC. Y TRABAJO s/IMPUGNACION DE DEUDA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los , reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

BLD S.A. apela la Resolución 2018-4966-APN-DRLF#MPYT que desestima el recurso de impugnación interpuesto contra la Resolución DRF N° 14822/2017 que impone a la misma una multa de \$ 26.586,2 por la infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683 (texto ordenado por Decreto N°821/98), respecto del Sr. Haberkorn, a quien oportunamente se lo relevó como dependiente de la sociedad.

La recurrente efectúa el depósito de la suma cuestionada, por lo que se encuentra cumplido el recaudo dispuesto por el artículo 15 de la ley 18820.

Respecto a la solicitud de acumulación de procesos planteada por la recurrente, toda vez que no surge del sistema de consultas de la Cámara la existencia de ningún otro expediente tramitando ante la misma cuyo accionante fuera BLS S.A., cabe rechazar la acumulación de los recursos invocados.

Sostiene la apelante que el sujeto relevado no es dependiente de la misma sino que media entre ella y los Sres. Carrere y Haberkorn un contrato de agencia. Señala que el contrato de agencia fue suscripto en fecha 06/06/2012 y que entre los Sres. Carrere y Haberkorn existe una sociedad, datando el contrato de constitución de la misma de fecha 14/09/2017. Alega que la sociedad posee número de CUIT y un empleado a su cargo. Acompaña, en tal sentido, la documentación que avalaría la regularidad de su constitución y funcionamiento. Cuestiona el procedimiento de determinación de la sanción. Con su descargo la actora aporta documentación referida al contrato de agencia, a la constitución de la sociedad y al carácter de socio del sujeto relevado.

El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, hace hincapié para determinar la multa en lo declarado al momento del relevamiento, donde el trabajador afectado no manifestó su calidad de socio y declaró ser empleado de la requerida, consignando fecha de ingreso, jornada de trabajo y tareas desarrolladas. Refiere lo dispuesto por la Resolución 1891/05, art.3 y el carácter formal de la infracción que se imputa. Fija, en consecuencia, la multa.

La apelante acompaña constancia de inscripción en la AFIP de la sociedad simple existente entre los Sres. Haberkorn y Carrere cuyo inicio de actividades data de fecha 01/2018; contrato de agencia celebrado en fecha 06/2012, el cual tiene firmas certificadas y fecha cierta; y contrato social entre los Sres. Haberkorn y Carrere de fecha 14/09/2017.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

La cuestión a dilucidar en el presente expediente, radica en resolver si estamos en presencia de una relación de trabajo encubierta en fraude a la ley laboral y previsional o ante un trabajador autónomo. En ese orden, debe ahondarse el análisis de modo de objetivar, sin margen de dudas, la certeza en cuanto se ha verificado un acto simulado y la consiguiente sanción que pretende imponerse. El art. 1479 del Código Civil y Comercial dispone que: "Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada proponente o empresario, de manera estable, continua e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al proponente. El contrato debe instrumentarse por escrito".

A tal fin, el rasgo de autonomía resulta esencial en la tipificación de la figura de la agencia y determina su deslinde respecto de la regulación jurídica de las relaciones de índole laboral, de modo tal que el agente no es un subordinado de su proponente, ya que tiene un establecimiento propio y una organización empresarial, con la que realiza la actividad encomendada en forma autónoma y a su propio riesgo, sin que a ello obsten las instrucciones a las que suele estar sometido, ya que por su explotación habitual y profesional adquiere calidad de comerciante.

Como sostiene el Dr. Maddolani, con el objeto de determinar si se trata de una relación laboral encubierta: "Hay que ver si el agente tiene o no una organización propia para determinar si hay o no contrato de trabajo, por ejemplo una posibilidad es que tenga empleados a su cargo" (Maddolani, O. (2016) "El contrato de trabajo y los contratos de colaboración empresarial en el Código Civil y Comercial" Ponencia prestando en el Congreso de AMATRABA del 28/08/2016).

A tal efecto cabe decir que la apelante manifiesta que la sociedad simple existente entre el Sr. Carrere y Haberkorn tiene una persona a su cargo, Maliandi Guillermina, y a fin de acreditar dicho vínculo acompaña dos recibos de sueldo de los períodos 05/18 y 06/18, de los cuales surge que su fecha de ingreso data del 01/01/2018. Cabe resaltar al respecto que la fecha de ingreso de la empleada resulta ser muy posterior a la fecha del relevamiento efectuado por el Organismo interviniente, datando la inspección de fecha 24/07/2015. Es decir, la aquí recurrente invoca a fin de justificar el carácter de agenciero del Sr. Haberkorn, el vínculo laboral del mismo como socio de "Mauro Daniel HABERKORN y Héctor Javier CARRERE SOCIEDAD SIMPLE" con la Sra. Maliandi, que se efectivizó varios años después de la inspección. Por lo tanto, desde ya cabe adelantar dicho argumento no resulta determinante en lo que refiere a la procedencia del recurso.

En cuanto al agravio vertido en torno a la titularidad de la relación laboral que se intenta desvirtuar con el contrato de agencia celebrado con el Sr. Haberkorn y Carrere, cabe señalar en primer lugar que dicho contrato por si solo no desvirtúa la presunción de existencia

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#33129334#359341133#20230426100922895



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de un vínculo laboral en los términos del art. 23 de la LCT que dimana del hecho de haberse encontrado a la persona por la que se impuso la multa por infracción a la ley 11.683 (artículo sin número agregado a continuación del art. 40) prestando servicios para la actora, lo que concuerda con lo normado por el art. 4 de la Ley 26.063 en cuanto establece que “...En materia de Seguridad Social, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por las partes....”.

Por otro lado, considero de trascendental importancia la declaración espontanea efectuada por el trabajador relevado, correspondiéndole al intimado producir las pruebas conducentes a demostrar la falsedad de los hechos en los que se sustentan las actas de inspección labradas por el organismo (CPCC art. 377). La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antiguo ha sostenido que “acreditada la materialidad de la infracción, de ello resulta la intención de defraudar, salvo prueba suficiente de su inocencia por el contribuyente” (Fallos 210:1229; 225:412, entre muchos otros).

En principio, las reglas de la experiencia y de la sana crítica en la valoración de los hechos no autorizan a presumir que una persona relevada por un funcionario público en un procedimiento rodeado de todas las garantías y formalidades de ley (CCC, arts. 289, inc. “b” y 296), vaya a falsear la realidad de un vínculo jurídico que lo tiene como protagonista – objeto de relevamiento- o a mentir a la autoridad pública sobre la naturaleza del mismo.

Es que las personas inquiridas en forma sorpresiva por la autoridad pública saben muy bien que la continuidad de ese vínculo –comercial o laboral, para el caso sería lo mismo- podría depender –como sucede en la mayoría de los casos- de lo que ellas mismas respondieran al respecto, teniendo en cuenta que es la empresa en su calidad de agente de retención de los aportes y contribuciones a la seguridad social la que está siendo inspeccionada y eventualmente sería ella –y no el personal relevado- la que debería ser intimada a restituirlos en concepto de capital, intereses punitivos, moratorios, multas, costas, etc. si no hubiera demostrado que esa persona habría mentido o falseado la realidad de esa relación jurídica.

De ello deviene que no resultarían ajenos al interés personal del agente relevado el tenor de sus respuestas en torno a la naturaleza del vínculo que lo uniría con la empresa. En efecto, si se tratara de un trabajador en negro –patología muy difundida en el mundo del trabajo- mentirle a la autoridad de aplicación para conservar la remuneración baja que percibe esa persona en el marco de una relación jurídica clandestina, significaría no sólo renunciar a las leyes protectoras del trabajo, sino también a su futura jubilación, lo cual no resultaría





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

razonable avalar en una decisión jurisdiccional, sin una prueba acabada y fehaciente sobre estos hechos contrarios al sentido común y a lo que normalmente sucede en la realidad.

Ahora bien, esta Sala ha señalado al respecto lo siguiente: “Las deudas previsionales por aportes y contribuciones tienen dos acreedores o interesados: por un lado el organismo administrativo, ente encargado de su fiscalización, recaudación y ejecución; y por el otro lado, el titular de los aportes omitidos, quien resulta el sujeto perjudicado ante la falta del empleador; esto, más allá de la afectación sufrida por el sistema previsional en su conjunto. Por ello, el empleado no resulta un tercero ajeno, y por ende, la actividad tendiente a regularizar su situación resulta de una incidencia gravitante a los fines de interrumpir los plazos de prescripción (Del voto de la mayoría, la Dra. Adriana Lucas –jueza subrogante- votó en disidencia).” (v. “Obligado y Cía. Ltda. S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/impugnación de deuda”; sentencia del 17/04/06; Luis Herrero, Adriana Lucas, Emilio Fernández).

Lo que faltaría agregar a esta doctrina, por lo demás, sería que las deudas previsionales por aportes y contribuciones a la seguridad social tienen no sólo dos acreedores, sino también un solvent determinado, que es la persona física o jurídica obligada por ley a retener y depositar tales cargas sociales, bajo apercibimiento de sufrir onerosas sanciones pecuniarias si no lo hiciere en tiempo y en forma.

Es que tanto las actas de inspección y de determinación de deudas labradas por funcionarios de la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Administración Federal de Ingresos Públicos), constituyen instrumentos públicos (CCC, art. 289 inc. “b”), por lo que hacen “plena fe” sobre el contenido de las declaraciones sobre reconocimientos, enunciaciones de hechos, etc. “directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado”, salvo prueba en contrario (v. art. 296 inc. “b”).

Ergo, la carga de la prueba pesa por disposición expresa de la ley de fondo sobre el sujeto que niega o impugna el contenido de las declaraciones plasmadas en un instrumento público, es decir que -en supuestos como los de autos- pesa sobre la empresa recurrente. En tal sentido, si procedemos a analizar la restante prueba aportada por la apelante, esto es la constancia de inscripción en la AFIP de la sociedad simple habida entre los Sres. Haberkorn y Carrere cuyo inicio de actividades data de fecha 01/2018 y el contrato social habido entre los mismos de fecha 14/09/2017, surge que dicha sociedad se constituyó, y comenzó a funcionar más de dos años después de la fecha en la que se constató el presunto incumplimiento (28/08/15), esto quiere decir que la sociedad al momento de la inspección no existía. Por lo tanto, con la documentación de la que intenta valerse el recurrente no se desvirtúa los fundamentos del hecho generador de la infracción imputada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Cabe agregar que el artículo 23 de la LCT establece lo siguiente: “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esta presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio.”. Dicha presunción, en consecuencia, deviene indivisible con respecto al sujeto protegido y a la persona física o jurídica obligada a respetar sus derechos laborales y previsionales (el empleador), por mandato constitucional y convencional. Es que no sólo se daña al trabajador cuando se lo eyecta de las leyes protectoras del trabajo en los supuestos de simulación ilícita (“figuras no laborales”), sino también cuando se lo extraña del beneficio jubilatorio futuro al que también tiene derechos en su condición de trabajador.

Como bien señalan Justo López, Norberto O. Centeno y Juan C. Fernández Madrid: “La presunción cae cuando sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Esto supone que tenga este último una organización propia productiva o de prestación de servicios, con los elementos económicos, técnicos y personales indispensables para diferenciarse y actuar con independencia de la organización que tenga la persona individual o colectiva a la que se le presta servicios.” (v. Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Ediciones Contabilidad Moderna, 1978, t. I pág. 197).

Por su lado, el artículo 21 de la L.C.T. consagra el principio de primacía de la realidad al establecer que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. A ello se aduna las normas contempladas en la ley laboral protectorias del régimen de contrato de trabajo. De allí que lo pactado por las partes cede ante la realidad de los hechos aunque se formalice por instrumentos públicos (Vázquez Vialard Tratado, t.II, p. 270).

En el presente caso, el sujeto relevado manifestó ante la inspección, como se ha señalado, que se encontraba trabajando para la sociedad impugnante, informó su fecha de ingreso, sus tareas y su jornada laboral, todos ellos indicios de una relación dependiente y no autónoma como pretende la apelante. Respecto al contrato de agencia que se acompaña cabe subrayar que el mismo no constituye un instrumento público como sostiene la agraviada, se trata de un contrato entre privados cuyas firmas se encuentran certificadas y posee fecha cierta.

Del otro lado, el acta de inspección que extendió el agente público si constituye un instrumento público, el cual no fue impugnado mediante prueba suficiente en contrario ni redargüido de falso por la parte interesada, por lo que hace plena fe el contenido de las declaraciones y enunciaciones de hechos relacionados con el objeto principal del acto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

instrumentado. En consecuencia, no se ha desvirtuado la presunción que emana del mencionado instrumento público, de hallarnos frente a una relación de trabajo subordinado regulada por la Ley 20744, la cual se habría pretendido encubrir mediante la figura de contrato de agencia, incompatible con ella, por lo que se confirma la resolución. Los elementos aportados (contrato de agencia, contrato de constitución de la sociedad, recibos de sueldo) resultan, insuficientes para acreditar la condición de agenciero del trabajador relevado. Por lo que no ha quedado acreditada la inexistencia de una relación laboral entre el relevado y la sumariada en los términos de la ley 20744 (T.O.).

Respecto a la improcedencia de la duplicación de multa prevista en el art 20 inc) planteada por la recurrente, cabe adelantar que atento la misma no acreditó tener menos de diez empleados y siendo que el trabajador relevado representa más del 50% de los empleados ocupados por la actora corresponde confirmar la duplicación de la misma dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen a la actora, conforme art. 68 CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados. "La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo" (voto del Dr. Carlos S. Fayt). (CSJN T. 315 , P. 1620).

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018). Se regulan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en un UMA \$ 14.933- catorce mil novecientos treinta y tres pesos, y los de la demandada en tres UMA \$ 44.799 –cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve- (conf. Acordada 09/2023). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder (Cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" sent. del 16.06.03, Fallos 316:1533).

Por lo expuesto, propicio: Rechazar el recurso impetrado, con costas. (art.68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en una UMA equivalente a \$ 14.933- pesos catorce mil novecientos treinta y tres, y los de la demandada en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

tres UMA equivalente a \$ 44.799– cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve - (conf. Acordada 9/2023), importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero a las conclusiones del voto del Dr. Fantini.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** 1) Rechazar el recurso impetrado, con costas a la vencida. (art.68 CPCCN); 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en una UMA equivalente a \$ 14.933- pesos catorce mil novecientos treinta y tres y los de la demandada en tres UMA equivalente a \$ 44.799– cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve - (conf. Acordada 9/2023), importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

PAR

